



PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La H. Cámara de Diputados

RESUELVE

Expresar su repudio al accionar represivo, racista y violatorio de los derechos humanos llevado adelante por el Immigration and Customs Enforcement (ICE) en distintas ciudades de los Estados Unidos, particularmente en el estado de Minnesota, en el marco de la ofensiva antiinmigrante impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Repudiar la política migratoria y de seguridad del gobierno estadounidense, que combina la criminalización de la migración, la militarización de ciudades y el uso de fuerzas federales, promoviendo persecución, detenciones arbitrarias, violencia institucional y asesinatos de activistas y observadores de derechos humanos.

Manifestar su solidaridad y apoyo a las movilizaciones masivas desarrolladas en Minneapolis y en decenas de ciudades de los Estados Unidos contra el ICE, en particular tras el asesinato de la observadora legal Renee Good, activista lesbiana de 37 años, mamá de un hijo, a pocas cuadras de donde fue asesinado George Floyd en 2020, dando un nuevo salto en la escalada de violencia y represión estatal.

Expresar su respaldo al día de acción, huelga y paro convocado por sindicatos, organizaciones sociales y comunitarias en Minnesota este viernes 23 de enero, así como a las acciones de solidaridad impulsadas en otras ciudades de los Estados Unidos, en defensa de los derechos de las personas migrantes, contra el racismo institucional y la represión estatal.

Reafirmar el rechazo a toda forma de intervención imperialista de los Estados Unidos en América Latina, denunciando la estrecha vinculación entre la política exterior del gobierno de Donald Trump en la región y las prácticas de militarización y represión interna, que afectan de manera directa a las comunidades migrantes, trabajadoras y racializadas.

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Romina del Plá
Néstor Pitrola

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Los Estados Unidos atraviesan una escalada represiva y autoritaria, impulsada por el gobierno de Donald Trump, que combina una ofensiva antiinmigrante sin precedentes, el uso creciente de fuerzas federales militarizadas en el territorio interno y una renovada política de intervención imperialista en América Latina.

En este marco, el accionar del Immigration and Customs Enforcement (ICE) se ha transformado en uno de los principales instrumentos de disciplinamiento social, persecución política y violencia estatal. Las operaciones del ICE han adoptado características abiertamente paramilitares: redadas masivas, detenciones arbitrarias, uso de fuerza letal, amenazas a activistas y observadores de derechos humanos, y una política sistemática de terror sobre comunidades migrantes, racializadas y trabajadoras.

Sólo en 2025, treinta y dos personas murieron bajo custodia del ICE. Estas muertes ocurrieron mientras la administración Trump intensificaba su ofensiva migratoria, arrestando a un número récord de personas en diciembre. Solo en ese mes, el ICE detuvo a 68.440 personas; casi el 75% de ellas no tenía antecedentes penales. Como informa The Guardian, "Diciembre también fue el mes más mortífero bajo custodia del ICE: seis personas murieron".

En este contexto, miles de familias han sido separadas, niñas y niños han sido encarcelados en centros de detención migratoria y comunidades enteras viven bajo un régimen de terror cotidiano. Este entramado represivo constituye un dispositivo estatal sistemático que utiliza al ICE como herramienta central de persecución, disciplinamiento social y criminalización de la migración. En este marco, amplios sectores de la población trabajadora y de los movimientos sociales han comenzado a cuestionar la legitimidad misma del ICE, reclamando el cierre de los centros de detención y el fin de sus operaciones.

El asesinato de la observadora legal Renee Good el 7 de enero pasado, a manos de un agente de estas fuerzas en Minneapolis marcó en ese contexto un punto de inflexión. Durante varios días consecutivos, Minneapolis se convirtió en el epicentro de una movilización sostenida que enfrentó día y noche la presencia del ICE, dando lugar a una ola de protestas que se extendió a cerca de mil manifestaciones en todo el país. Ciudades como Los Ángeles, Seattle, Detroit, Chicago, Houston, Nueva York y Washington D. C. fueron escenario de protestas que articularon el rechazo a la violencia antiinmigrante con una denuncia explícita de la política imperialista de los Estados Unidos en América Latina, con amplios sectores que denuncian la relación directa entre la política exterior contra pueblos oprimidos y la violencia estatal dentro de las fronteras.

Consignas como "Fuera el ICE de nuestras ciudades", "Fuera las manos de Venezuela", "No a la guerra por el petróleo", "Fuera Estados Unidos de América Latina", recorren las protestas, mientras la solidaridad crece, con vecinos y trabajadores que se organizan para frenar redadas y proteger a las comunidades migrantes, como sucede en la educación, donde las maestras impulsaron iniciativas para resguardar a estudiantes y familias,

organizando acompañamientos escolares y promoviendo la creación de “equipos santuario” en las escuelas, con el objetivo de defender a niñas, niños y adolescentes frente a la persecución migratoria y a la constante violación de los derechos más elementales.

Particular relevancia adquiere en ese marco el llamado de organizaciones sindicales y sociales de Minnesota a un día de acción y huelga para este viernes 23 de enero, en reclamo de justicia por Renee Good y de la expulsión del ICE de sus comunidades. Este llamado a paralizar el trabajo, las escuelas y las actividades cotidianas frente a políticas autoritarias y represivas de Trump comenzó a generar acciones de solidaridad en otras ciudades del país. Un gran ejemplo que no merece menos que todo nuestro apoyo, y el llamado a fortalecer esa perspectiva a nivel continental. Algo fundamental en la pelea por torcer el brazo a la política del imperialismo de Trump en Estados Unidos y en toda la región.

La gravedad de la situación en Estados Unidos se ve profundizada por el carácter impune del accionar del ICE. Con el mayor presupuesto entre las agencias federales, con respaldo político explícito y con reclutamiento activo de sectores de extrema derecha, el ICE funciona como un engranaje central en la institucionalización de la violencia racista y supremacista. Las denuncias sobre torturas, muertes en centros de detención y persecución a activistas se multiplican, mientras los controles judiciales resultan insuficientes y, en muchos casos, funcionales a la normalización de la represión.

Frente a este escenario, resulta evidente que la defensa de los derechos humanos, de las libertades democráticas y del derecho a la protesta no puede quedar limitada a declaraciones formales ni a la espera de resoluciones institucionales en los Estados Unidos. Exige una respuesta basada en la unidad de acción, tanto a nivel nacional como internacional.

Desde Argentina, país con una historia marcada por la lucha contra el terrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos, corresponde expresar un repudio claro y categórico al accionar del ICE, a la política antiinmigrante y represiva del gobierno de Donald Trump, y a la renovada ofensiva imperialista sobre América Latina. Del mismo modo, resulta imprescindible manifestar una solidaridad activa con las movilizaciones, huelgas y acciones de resistencia que se desarrollan en Minneapolis, Minnesota y en todo el territorio estadounidense en contra de la política antiinmigrantes y xenófoba de Trump.

En la Argentina, esta deriva represiva tiene una expresión concreta en la política antiinmigrante impulsada por el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, a través del reciente lanzamiento de la Agencia Nacional de Migraciones, bajo la conducción política del Ministerio de Seguridad encabezado por Alejandra Monteoliva, la sucesora de Patricia Bullrich. También en el DNU 366/25 que modifica la ley 25.871, con el cual el gobierno de Milei avanza en un régimen de deportaciones sumarias, restricciones al ingreso y permanencia, ampliación de facultades discrecionales y una orientación abiertamente punitiva que consolida una verdadera policía migratoria, reforzando prácticas de persecución, racismo y criminalización de la migración, en sintonía directa con el modelo del ICE.

Corresponde asimismo alertar que mediante el decreto 941/2025, sin ninguna “necesidad” ni “urgencia”, el gobierno de Javier Milei dispuso la ampliación de las facultades de los organismos de inteligencia, que apunta a desarrollar una política semejante a la del ICE en el país. Una nueva muestra del alineamiento y la subordinación del gobierno de Milei a los Estados Unidos, por lo que llamamos a rechazar de inmediato este inconstitucional decreto.

Por todos estos motivos, y por los que expondremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.